

Popayán, junio de 2023

Doctora

ANA MILENA VALENCIA GUERRA

Directivo Ponente

Contraloría General de la República

Gerencia Departamental Colegiada del Cauca

Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

C.c. sandra.mellizo@contraloria.gov.co

Asunto: Versión Libre y Espontánea. Proceso PRF-2019-00858

Cordial saludo,

Con motivo de la vinculación del suscrito al proceso de responsabilidad fiscal de la referencia mediante Auto No. 183 del 17 de abril de 2023, me permito rendir versión libre y espontánea, amparado en el derecho constitucional de defensa, en los siguientes términos:

Me llamo PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.546.275, expedida en Popayán (Cauca), con dirección de residencia en la carrera 6C #31N-110, barrio Rosales de la Hacienda, Casa 19, Popayán, Cauca; nacido en Popayán, Cauca el 22 de junio de 1964; hijo de Pedro Antonio Potes Sandoval y Teresa Inés González Medina; estado civil: Casado con María del Carmen Casas Trujillo; con dos hijas de nombres Isabel Cristina Potes Casas y Ana María Potes Casas; nivel de escolaridad profesional con especialización; de profesión: Ingeniero Civil; actualmente me encuentro vinculado a la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P. EMCASERVICIOS mediante contrato de trabajo a término definido.

Sea lo primero recalcar que mi vinculación con MOVILIDAD FUTURA S.A.S., siempre se estableció por virtud de contratos de prestación de servicios y en ningún momento ostenté la calidad de servidor público. En esa medida, los servicios que presté a dicha entidad, siempre estuvieron enmarcados dentro de dichos contratos, los cuales, si bien es cierto contemplaban en el objeto, el apoyo en el componente de gestión técnica, para liderar procesos de infraestructura, establecían también el alcance de los mismos en las actividades contratadas. No es cierto por lo tanto que mis actuaciones en MOVILIDAD FUTURA S.A.S., se equiparasen a las de un servidor público, con el deber de apegar mis actuaciones a un manual de funciones, como erradamente lo advierte el Ente de Control, cuando menciona que en la época en que se efectuó la liquidación de los materiales y se aprobó en el Comité de Conciliación yo ostentaba la calidad de "LIDER DE GESTIÓN y/o COORDINADOR DEL ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA de MOVILIDAD FUTURA, cargo que de conformidad con el Manual de funciones de la entidad, para la época de los

hecho, tenía entre otras las siguientes, misión y funciones respecto del área técnica:....” (Sic)

Al no tener la calidad de funcionario público, NO estaba llamado a verificar la liquidación de los materiales que efectuó el señor OSCAR CAICEDO, en tanto, las actividades a mi contratadas NO contemplaban verificar, avalar o revisar los informes que rindiesen otros profesionales de la empresa. Vale decir que para la época de los hechos MOVILIDAD FUTURA S.A.S., tenía poco personal de planta y la mayoría éramos colaboradores contratistas que estábamos en un mismo plano profesional. Si bien es cierto, el objeto de los contratos que me vincularon para los años 2014, 2015 y 2016 establecían en su objeto el apoyo para liderar los procesos de infraestructura, bajo ningún argumento podría interpretarse que, se me hubiese conferido una facultad de responsable, veedor o vigilante del trabajo profesional que realizó el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ, quien al igual que yo, era contratista por prestación de servicios (pero quien por virtud de sus actividades contractuales fue el encargado de tasar y verificar los valores objeto de la liquidación del contrato que nos ocupa), lo que hace que el suscrito PEDRO FELIPE POTES no sea el gestor fiscal de los hechos que se reprochan en la presente investigación fiscal.

Enfatizo que ninguna de las actividades específicas que daban alcance al objeto contratado, me imponían la responsabilidad de hacer tal cosa. Tampoco se me solicitó ni de manera escrita o verbal por parte del Gerente de Movilidad Futura, Ingeniero VICTOR ROSERO BUSTAMANTE, la verificación de dicho informe.

En razón de lo anterior, es claro que NO hubo “omisión” de mi parte como lo interpreta el investigador. Tal y como ya precisé, mis actuaciones, estuvieron circunscritas a lo contratado sin que fuera yo el gestor fiscal de los hechos objeto de reproche.

Respecto de la firma de los oficios fechados el 16 y 20 de enero de 2015, ambos los suscribí, en el marco de solicitud expresa de la Oficina Jurídica de Movilidad Futura S.A.S., para que se valoraran y tasaran los PERJUICIOS causados a la empresa por cuenta del repetido incumplimiento del Consorcio VIAS POPAYÁN al Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012. Nunca, se trató de una solicitud para realizar el conteo de los elementos de espacio público entregados por el contratista. De hecho, en los dos oficios en mención se hace expresa referencia a que se trata del cálculo de los perjuicios causados por el consorcio mas no de la liquidación final del contrato que es donde inicialmente, según se dice en el auto de apertura de este proceso, se genera el presunto detrimento patrimonial.

El primero lo suscribí, el 16 de enero de 2015 junto con el ingeniero LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ y en él se presentó la JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO de los perjuicios causados hasta ese momento por el consorcio VIAS POPAYÁN.

Posteriormente, el 20 de enero de 2015, suscribo, junto al ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ, un "resumen final de los valores a tener en cuenta para la declaratoria de incumplimiento del citado contratista", indicando en una nota:

*"Dado que en la última semana de diciembre de 2014, el Consorcio Vías Popayán, entregó insumos requeridos para las obras de espacio público, por la suma \$618.743.536 y devolución de elementos del PIPMA por valor de \$23.724.571. **conforme al anexo**, se podrán tener como sumas a favor del contratista".*

Debo resaltar que a dicho documento **se anexó** la "RELACION DE COSTOS DEL MATERIAL ENTREGADO POR EL CVP" (Consorcio Vías Popayán) elaborada por el Ingeniero Civil OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ, y respecto de lo cual, reitero, NUNCA recibí indicación de revisar o avalar.

Se trató entonces, de la presentación final de las cifras que cada uno de nosotros habíamos calculado; yo, en la parte de estimación de los perjuicios y el Ingeniero CAICEDO FERNANDEZ, de la relación de costos del material entregado por el consorcio para espacio público que él mismo había efectuado con total independencia y autonomía profesional, (tal como se deriva de la naturaleza del contrato de prestación de servicios) a solicitud de la Entidad. Cada una de las informaciones dadas en dicho documento fueron asumidas por cuenta y riesgo de los profesionales que rendimos la información, pero nunca de manera solidaria; se trató simplemente de la síntesis de los datos en un solo documento del área técnica, sin que pueda reprocharse que omití revisar lo realizado por mi colega en meses anteriores pues no estaba en mi contrato, como ya lo advertí, la actividad de supervisar o de avalar lo hecho por un colega, quien siendo par como contratista respondía al igual que yo de manera individual por los servicios prestados en cada caso particular. Así las cosas no es de mi actuación, realizada bajo el marco estricto de mis deberes contractuales que se deriva el supuesto detrimento patrimonial, menos aún podría hablarse de una causalidad o nexo de causalidad entre mi actuación y el daño.

Contrario a lo anteriormente afirmado, al no ser yo el que avalaba el trabajo de los otros contratistas, ni los supervisaba, ni mucho menos era gestor fiscal frente a los recursos públicos objeto de la investigación, si existió un INTERVENTOR del contrato quien tuvo a su cargo la interventoría integral del Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012 y que por tal razón era el llamado a revisar los documentos presentados en el marco de los hechos, por tal razón se solicitará la vinculación de dicha persona jurídica y/o quienes lo integraban.

Adicionalmente debe considerarse que ambos documentos se presentan después del mes de diciembre de 2014, fecha en la cual el gerente de Movilidad Futura había suscrito el BALANCE FINANCIERO con el cual él mismo avaló el informe entregado por el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ, lo que hacía aún más inocua alguna revisión de dicho conteo de mi parte en el mes de enero de 2015.

Sobre mi asistencia a las sesiones del comité de conciliación, de manera alguna comprometo o me endilga responsabilidad fiscal, puesto que siempre acudí a este en CALIDAD DE INVITADO y nunca como miembro del mismo, por no ser funcionario de la entidad, razón por la cual no tenía poder de decisión.

Así las cosas, los argumentos que fundan mi vinculación adolecen de varias imprecisiones que viciarían cualquier imputación de responsabilidad fiscal en mi contra.

En este punto quiero recalcar, que en razón del objeto y actividades para las cuales fui contratado por MOVILIDAD FUTURA S.A.S., NO fui gestor fiscal, en tanto NO DISPUSE, NI MANEJÉ, NI ADMINISTRE bienes o recursos públicos; mi actuación se basó en rendir un informe sobre la valoración y justificación de los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista CONSORCIO VIAS POPAYAN al contrato de obra No. 01 de 2012. El primero de ellos referido únicamente a la actualización de precios de las obras no ejecutadas y el segundo un resumen final de las cifras a tener en cuenta por la entidad en el proceso por incumplimiento.

Respecto del concepto de gestor fiscal, el Consejo de Estado en sentencia del 19 de mayo de 2016, Radicación número: 68001-23-33-000-2013-01024-01, Actor: HORACIO ARROYAVE SOTO Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, dijo:

“...la responsabilidad fiscal debe necesariamente recaer sobre el manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del Estado, sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio”.

Así las cosas, es claro que no existió de mi parte una conducta que pueda calificarse como dolosa o gravemente culposa, en la medida en que mi actuación no se encaja dentro de concepto de gestión fiscal.

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

La Ley 1474 de 2011, en sus artículos 83 y 84 establece las pautas sobre el ejercicio y responsabilidad de los interventores en materia de contratación estatal, catalogándolos como vigilantes del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En esa medida, es claro para el suscrito que hay otro actor en todo este asunto que debe ser llamado a dar su versión de los hechos y a responder por sus posibles omisiones, que no ha sido llamado; se trata del CONSORCIO MALLA VIAL, quien tuvo a su cargo la interventoría integral del Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012.

De sus actuaciones hay suficiente información en el expediente procesal y amerita su vinculación para que expliquen al despacho, si los elementos de espacio público entregados por el contratista, fueron verificados por ellos y si en alguno de sus informes de interventoría registraron la entrega de ellos. Más que cualquier otro

actor, el interventor estaba llamado a hacer seguimiento permanente y detallado de la ejecución del contrato, razón por la cual se hace inverosímil que no sea llamado a este escenario a responder.

Basado en lo dicho a lo largo de este escrito y a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos, solicito al Despacho se sirva VINCULAR como presuntos responsables a.

- CONSORCIO MALLA VIAL y sus integrantes INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS" y GRUPO METRO COLOMBIA "GMC INGENIEROS S.A." FABIAN GARCIA RIOS y EDUARDO GIRONZA LOZANO, quienes tenían el deber de ser garantes de la adecuada ejecución del mismo y de informar a MOVILIDAD FUTURA S.A.S., sobre los elementos que se habían recibido.

Los datos para el contacto de los sujetos antes descritos podrán se solicitados a MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

SOLICITUDES PROBATORIAS

Solicito se decrete la práctica de las siguientes pruebas:

- Oficiar a MOVILIDAD FUTURA S.A.S., para que certifique los cargos y nombres de las personas que eran los miembros del comité de conciliación para los meses de enero a marzo de 2015.
- Se cite a declaración juramentada al señor LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.713.241, teléfono 301 478 77 80 y quien puede ser ubicado a través del suscrito o al correo electrónico luisalbertogarcialop@gmail.com para que deponga sobre el contexto en el cual se suscribió el documento fechado el 16 de enero de 2015.

PETICIÓN

Por todo lo expuesto, y considerando que en el presente asunto, no puede calificarse mi actuación como gestión fiscal, ni mi participación dentro de los hechos que nos ocupan tiene vínculo o nexo causal con el presunto daño patrimonial infligido a MOVILIDAD FUTURA S.A.S., solicito respetuosamente al despacho se emita decisión de ARCHIVO del expediente en favor del suscrito, al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

Atentamente,



PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ
C.C. 10. 10.546.275